

INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN

Excma. Cámara en Documentos y Locaciones – Sala IIº

JUICIO: “GRAMAJO, INÉS JOSEFINA vs. FERNÁNDEZ, CHRISTIAN ANÍBAL S/DESALOJO” – EXPTE. Nº 9.062/17-Q1

CHRISTIAN ANÍBAL FERNÁNDEZ, derecho propio, de las demás condiciones personales que constan en autos, ante V.E. respetuosamente comparece y dice:

I - INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN

Que vengo por el presente a **INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN** en contra de la **Sentencia Nº 353/19** (fs. 150), dictada en fecha 03 de Diciembre de 2019 por ese Excmo. Tribunal, en cuanto resuelve, por un lado, **DENEGAR el recurso de queja por apelación denegada** interpuesto en autos por esta parte en contra del proveído de fecha 26 de Julio de 2019 dictado por la **Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la IIº Nominación** y, por otro lado, **DECLARAR ABSTRACTO** el pronunciamiento sobre la **inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T.** deducida en el recurso denegado, solicitando a V.E. que, declarando admisible el recurso que por el presente se interpone, eleve las presentes actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia a los efectos de la resolución del recurso referido, todo ello en

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. Nº 629 - Lº 01 - Fº 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. Nº 4703 - Lº K - Fº 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL Tº 97 - Pº 614

mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que seguidamente se expondrán, con expresa imposición de costas en caso de oposición.

II - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

En un todo de acuerdo con el Art. 754 del C.P.C.C.T. el recurso que por el presente se interpone resulta admisible por encontrarse en el caso reunidos los requisitos de admisibilidad exigidos por nuestro Digesto de Rito.

A) - PLAZO

Tomando en consideración que la **Sentencia N° 353/19** fue notificada personalmente a esta parte en fecha **06 de Diciembre de 2.019** (fs. 155), el plazo para interponer recurso de casación en contra de la sentencia referida, en un todo de acuerdo con el Art. 751 del C.P.C.C.T., vence el día **16 de Diciembre de 2.019**, con cargo extraordinario.

B) - SENTENCIA RECURRIDA

El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras, equiparándose también como tales las que, dictadas en una cuestión incidental, terminen el pleito o hagan imposible su continuación (**Art. 748 -inc. 1 del C.P.C.C.T.)** y cuando el mismo se fundare en que la sentencia impugnada incurrió en infracción a la norma de derecho, comprensiva tanto de la norma sustancial como de la formal (**Art. 750 del C.P.C.C.T.)**.

1.- Sentencia equiparable a definitiva

La **Sentencia N° 353/19** impugnada por el presente resuelve **DENEGAR** el **recurso de queja por apelación denegada** interpuesto en autos por esta parte en contra del proveído de fecha 26 de Julio de 2.019 que, dictado por la **Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la II° Nominación**, decide rechazar el recurso de apelación interpuesto en contra de la Sentencia de fecha 24 de Junio de 2.019, que, a su vez, decidiera rechazar el **incidente de acto procesal inexistente** interpuesto en fecha 27 de Marzo de 2.018 respecto del libelo de demanda.

Asimismo, el acto jurisdiccional que por el presente se impugna resuelve **DECLARAR ABSTRACTO** el pronunciamiento sobre la **inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T.** deducida en el recurso denegado.

El concepto de sentencia definitiva exhibe dos facetas inescindibles, la sustancial y la procesal.

En lo **sustancial**, la declaración judicial, al resolver la cuestión de fondo, decide una situación de hecho existente y la adecúa a una situación jurídica, disponiendo el reconocimiento de un derecho resultante de la declaración judicial.

En términos de nuestro Máximo Tribunal Provincial, sentencia definitiva, como acto jurisdiccional apto para ser

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° R - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL N° 97 - F° 614

impugnado por el recurso de casación, es aquella que decide actuar o denegar la actuación de la pretensión que fue objeto del proceso (**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, in re "JANDAR DE SALEH, MANUELA vs. ZULLI, FRANCISCO S/AMPARO POSESORIO Y OTRO", Sentencia N° 891, de fecha 03/12/1996**)

Desde lo **procesal**, sentencia definitiva es el acto jurisdiccional que pone fin al pleito o hace imposible su continuación o resolución de otro modo (**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, in re "OSPECOM Y OTROS vs. INGECO S.A. S/COBRO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES (REC. /QUEJA P/CASAC.DENEGADA), Sentencia N° 280, de fecha 07/09/1993**).

Los criterios antes expuestos fueron reiterados por ese Máximo Tribunal Provincial en **Sentencia N° 1048**, de fecha 29/11/2000, in re "COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO -QUEJA POR APELACION DENEGADA-", en **Sentencia N° 1132**, de fecha 28/12/2000, in re "SALVATIERRA CARLOS S/LESIONES LEVES CON ARMA DE FUEGO", en **Sentencia N° 113**, de fecha 07/03/2002, in re "G. A. C. Vs. L. D. A. S/PENSION ALIMENTICIA" y en **Sentencia N° 1.263**, de fecha 03/12/2.008, in re "**SIGLO XXI S.A. S/QUIEBRA**".

En otro orden de ideas, el concepto de sentencia definitiva se amplía con las **equiparables a definitiva**, que son aquellos actos jurisdiccionales que deciden una incidencia y que, a

pesar de que no han resuelto la cuestión de fondo, conforme al resultado arribado, hacen imposible la continuación del pleito -o su resolución de otro modo- y generan una lesión irreparable.

“...Asimismo, se equipara a tal a las que, aún dictadas en una cuestión incidental, terminen el pleito o hagan imposible su continuación. También pueden incluirse entre las equiparadas a definitivas, los pronunciamientos que provocan agravio de imposible o insuficiente reparación posterior...” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, *in re* “JANDAR DE SALEH, MANUELA vs. ZULLI, FRANCISCO S/AMPARO POSESORIO Y OTRO”, Sentencia N° 891, de fecha 03/12/1996) (Lo subrayado me pertenece)

La regla excluye a las sentencias que dejan abierta una vía de reparación; es decir, aquellas que sólo han adquirido autoridad de cosa juzgada formal, pero que pueden ser revisadas en un proceso de conocimiento, ordinario o sumario, posterior.

En tal sentido, la expresión normativa ***“dejan abierta una vía de reparación”*** (Art. 749 del C.P.C.C.T.) debe ser interpretada, a contrario sensu, con el alcance de que al recurrente no le queda otra vía jurisdiccional para solucionar su agravio, ya que si dispone de ella, el carril procesal extraordinario no queda habilitado.

Indudablemente el pronunciamiento recurrido vía casación por esta parte es definitivo o, si se quiere equiparable a tal,

CHRISTIAN ANIBAL FERNÁNDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - I° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - I° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

pues, por el modo que resuelve, pone fin, por un lado, a la cuestión relativa a la **inexistencia** endilgada, en tanto acto procesal, respecto del libelo de demanda y, por otro lado, al **planteo de inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T.** que, declarado de abstracto pronunciamiento, fuera introducido por esta parte al interponer el recurso de queja por apelación denegada que, a su vez, fuera denegado por el pronunciamiento en crisis.

Ello así, por un lado y respecto del **acto procesal inexistente**, habiendo el juez de primera instancia rechazado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que rechazara el referido planteo, la sentencia que por el presente se recurre, al denegar el respectivo recurso de queja por apelación denegada, **debe equipararse a definitiva**, pues, la mentada denegatoria implica, sin más, que la cuestión relativa a la inexistencia - en tanto acto procesal del libelo de demanda - no puede reeditarse en oportunidad procesal posterior alguna, toda vez que nuestro digesto de forma no prevé un futuro juicio ordinario en los procesos de desalojo como el que tramita por los autos principales.

Nótese, a su respecto, que en el limitado ámbito del recurso de apelación que pudiera interponer esta parte ante una futura sentencia que hiciere lugar al desalojo seguido en autos, de modo alguno podrá reeditarse la cuestión referida a la inexistencia del libelo de demanda en tanto acto procesal, toda vez que los agravios que pudiere exponer eventualmente esta parte sólo podrán estar referidos a

los argumentos vertidos en la potencial sentencia definitiva a recaer en estos obrados.

La referida consecuencia implica, lisa y llanamente, que esta parte vea frustrada su pretensión, pues no puede reeditar el contenido de la misma en la posteridad, extremo que redundaría en infracción al derecho de acceso a la justicia, derecho de raigambre constitucional.

Conforme jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reviste el carácter de sentencia definitiva aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, así como también la que causa gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, prive al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impida el replanteo de la cuestión en otro juicio (*Fallos*, t. 303:633).

En igual sentido, la Corte ha conferido el carácter de sentencias definitivas a aquellos pronunciamientos que obstan a la prosecución de la causa o inferen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (*Fallos*, t. 245, p. 204; t. 254, p. 282; t. 257, p. 187; t. 266, p. 47).

Por otro lado, respecto del planteo de **inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T.** deducido en el recurso denegado por la sentencia que por el presente se impugna y que

CHRISTIAN ANIBAL FERNÁNDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 91 - P° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - P° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - P° 614

fuera declarado de abstracto pronunciamiento, tampoco existe un eventual y futuro carril procesal para reeditar tal planteo.

Corresponde destacar, a sus efectos, que la declaración de cuestión abstracta del suficiente agravio constitucional esgrimido por esta parte, implica clara infracción del derecho de tutela judicial efectiva que, de raigambre constitucional y convencional, despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la jurisdicción propiamente dicho; segundo, una vez en ella, que sea posible la sentencia y obtener resolución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad del pronunciamiento.

En esa senda de razonamiento, no puede hablarse de tutela judicial efectiva ante un pronunciamiento, como el que se impugna por el presente, que deja de dar respuesta al agravio constitucional referido, pues tal pronunciamiento ha vedado el acceso mismo a la jurisdicción.

Así las cosas, lo resuelto por **Sentencia N° 353/19** causa a esta parte un perjuicio de imposible reparación posterior, toda vez que los agravios expuestos por el recurrente en el recurso de queja por apelación denegada que fuera, asimismo, denegado por el referido pronunciamiento, no pueden ser examinados a la posteridad por ningún Tribunal, agravios que exhiben entidad bastante para conducir a un resultado diverso del presente juicio, por lo

que de ser mantenidos generaríanse consecuencias de imposible o insuficiente reparación ulterior.

En consecuencia, el pronunciamiento recurrido vía casación por esta parte debe, cuanto menos, equipararse a definitivo por decidir en contra de los derechos del recurrente cuestiones que no pueden ser reexaminadas en oportunidad procesal posterior alguna (Art. 748 -inc. 1- del C.P.C.C.T.).

2.- Infracción a normas de derecho

La **Sentencia N° 353/19** importa franca violación al **Art. 88 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán** -que exige el control de constitucionalidad, aun sin petición de parte interesada, en aquellas causas llamadas a conocimiento del juzgador- y del **Art. 31 del C.P.C.C.T.** -que impone, como deber fundamental, administrar justicia sin que la negativa pueda encontrar fundamento en silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes-.

Conforme surge de constancias de autos, esta parte, en el recurso de queja por recurso de apelación denegado, efectuó, exhibiendo agravios constitucionales suficientes a su respecto, planteo de inconstitucionalidad respecto de la norma formal (Art. 436 del C.P.C.C.T.) que, aplicable al caso, consagra la regla de la inapelabilidad de las resoluciones que, dictadas en el proceso de desalojo, no fueren la sentencia definitiva.

CHRISTIANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - 1° 81 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - 1° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

Sin embargo y sin perjuicio de lo que se expone infra en relación a la incidencia planteada por esta parte en orden al libelo de demanda, confundiendo el thema decidendum e incurriendo en el **vicio de reformatio in peius**, el pronunciamiento en crisis fundamenta la denegatoria del recurso de queja por apelación denegada interpuesto por esta parte en una norma distinta a la que alegara el juez de primera instancia para rechazar el recurso de apelación que motivara la precitada queja.

Acto seguido, el acto jurisdiccional en crisis, sobre esa línea de razonamiento, declara abstracto el planteo de inconstitucionalidad deducido por esta parte con fundamento en que tal planteo estaba referido a una norma distinta y no aplicable al presente caso.

No obstante el vicio de reformatio in peius que impregna al pronunciamiento en crisis, lo cierto es que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por esta parte, en razón de los agravios constitucionales exhibidos (privación del derecho a la doble tutela), resulta extensible a toda la **regla de la inapelabilidad** establecida por nuestro Digesto de Rito en los procesos de desalojo, cualquiera fuera la norma que, dentro de tal régimen, sea utilizada para consagrar la mentada regla.

Siendo así, por expreso imperativo legal (Art. 88 del C.P.C.T.), el pronunciamiento en crisis, no pudo, válidamente,

desatenderse del examen de los suficientes agravios constitucionales expuestos por esta parte haciendo aplicación de otra norma que consagra la regla de inapelabilidad imperante en los procesos de desalojo.

Nótese a su respecto, asimismo y siguiendo el razonamiento del pronunciamiento en crisis, que el mismo abandona el principio *iure novit curia*, pues siendo los agravios constitucionales exhibidos por esta parte extensibles a toda la regla de la inapelabilidad consagrada respecto de los procesos de desalojo por el Digesto Formal, inexorablemente debió efectuar el test de constitucionalidad -y convencionalidad- a efectos de verificar si se verificaba en el caso la infracción que fuera fundamento del planteo de inconstitucionalidad declarado abstracto.

Igualmente, el pronunciamiento en crisis importa violación al **Art. 31 del C.P.C.C.T.**, pues con fundamento en la aplicación de una norma distinta a la sostenida por el juez de primera instancia, se exime de administrar justicia en el caso en examen.

3.- Arbitrariedad

Existe en el caso **arbitrariedad**, por cuanto el fallo que por el presente se impugna se encuentra inadecuadamente fundado pues, mediante el artificio de la aplicación de una norma distinta de la que fuera fundamento del rechazo del recurso de apelación por el juez de grado, omitió analizar los reparos

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.B.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° 01 - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL 797 - F° 614

constitucionales expuesto en el libelo de queja y que fundamentaban la procedencia de la misma.

Por otro lado, la sentencia que por el presente se impugna posee el vicio de **arbitrariedad fáctica** toda vez que ha omitido analizar y ponderar las verdaderas constancias obrantes en autos, al omitir meritar la norma que fuera fundamento del rechazo del recurso de apelación por el juez de grado y que, motivando la respectiva queja, fuera el fundamento de la misma, incumpliendo, de tal modo, el requisito de validez de los pronunciamientos judiciales.

C) - ANTECEDENTES FÁCTICOS

En fecha 22 de Marzo de 2.018 se notifica a esta parte el proveído de fecha 05 de Febrero de 2.018 por el cual se ordena correr traslado de demanda en el presente juicio.

En fecha 27 de Marzo de 2.018, esta parte se apersona a estos obrados y, al faltarle cargo actuarial al libelo por el cual la actora pretendió interponer demanda en el presente proceso, interpone incidente de acto procesal inexistente respecto del referido libelo, solicitando que, declarándose la inexistencia de tal acto procesal y la nulidad absoluta e insanable del proveído de fecha 05 de Febrero de 2.018, se proceda al archivo de las presentes actuaciones.

En fecha 23 de Mayo de 2.018, suspendiéndose los términos en el presente proceso, se ordena correr traslado a la

actora del incidente de acto procesal inexistente promovido por esta parte.

Contestado por la actora el traslado ordenado, emitida opinión por la Sra. Agente Fiscal y practicada y respuesta planilla fiscal, en fecha 11 de Septiembre de 2.019 se dicta proveído por el cual se ordena pasen los autos a despacho para resolver el planteo de nulidad interpuesto por esta parte.

Mediante proveído de fecha 08 de Octubre de 2.018, al haber advertido el a quo que el letrado que promoviera el presente proceso se apersonó a estos obrados invocado una personería que omitió justificar, ordena se lo intime al mismo a fin que acredite el carácter invocado acompañando poder suficiente.

Habiendo el letrado de la actora otorgado cumplimiento con la precitada intimación, en fecha 23 de Octubre de 2.018 esta parte interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra el mencionado proveído, solicitando se ordene el pase de los presentes obrados a despacho para resolver, conforme fuera ordenado por proveído de fecha 11 de Septiembre de 2.019.

En fecha 23 de Octubre de 2.018 se dicta proveído por el cual se ordena agregar la copia del poder acompañada por el letrado de la actora y vuelvan los autos como están llamados.

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL N° 97 - F° 614

En fecha 12 de Noviembre de 2.018, esta parte interpone recurso de revocatoria con apelación en contra del proveído antes mencionado en cuanto dispone la agregación del poder general para juicios acompañado por el letrado de la contraparte, solicitando se ordene el pase de los presentes obrados a despacho para resolver.

Corrido traslado a la actora de los recursos interpuestos por esta parte y contestado tal traslado, en fecha 12 de Marzo de 2.019 se dicta sentencia por la cual se resuelve rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por esta parte y denegar el recurso de apelación interpuesto en subsidio.

En fecha 24 de Junio de 2.019 se dicta sentencia por la cual se resuelve no hacer lugar a los planteos de nulidad e inexistencia de acto jurídico interpuesto por esta parte.

Notificado tal acto jurisdiccional a esta parte, en fecha 04 de Julio de 2.019, se interpone recurso de apelación.

En fecha 26 de Julio de 2.019, se dicta el proveído siguiente:

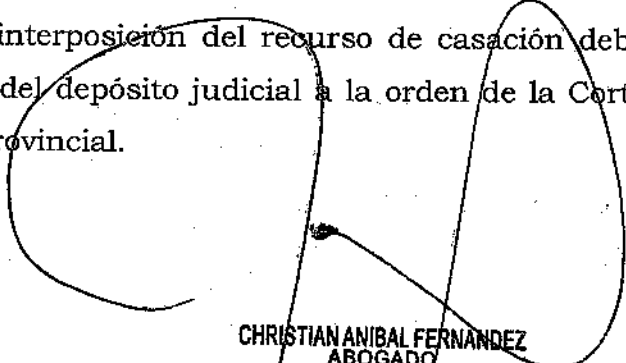
“San Miguel de Tucumán, 26 de julio de 2019.- Atento a lo normado por el art. 436 Procesal, no ha lugar el recurso intentado. PERSONAL” (Lo subrayado me pertenece).

Contra el proveído antes transcripto, esta parte interpone recurso de queja por apelación denegada, fundando tal queja en la **inconstitucionalidad** –por violación del derecho a la doble tutela previsto constitucionalmente en el Art. 18 de la Constitución Nacional y en los Arts. 8 –inc. 1 y 2 (h)- y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –de jerarquía constitucional (Art. 75 –inc. 22- de la Constitución Nacional)- del **Art. 436 del C.P.C.C.T.**, norma que fuera el fundamento del rechazo del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 24 de Junio de 2.019 que resolviera rechazar los planteos de nulidad e inexistencia de acto jurídico interpuestos por esta parte.

Sustanciado el referido planteo de inconstitucionalidad y emitida opinión por la Sra. Fiscal de Cámara, en fecha 03 de Diciembre de 2.019 se dicta la **Sentencia N° 353** (fs. 150) que, notificada en fecha 06 de Diciembre de 2.019, motiva el presente recurso.

D) – DEPÓSITO

En un todo de acuerdo con el Art. 752 del C.P.C.C.T. con el libelo de interposición del recurso de casación debe acompañarse la constancia del depósito judicial a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Provincial.



CHRISTIAN ANIBAL FERNÁNDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - P° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - P° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - P° 614

Sin embargo, el Art. 753 del C.P.C.C.T. exime del referido depósito judicial cuando el recurrente actúe con beneficio para litigar sin gastos.

En efecto, por proveído de fecha 10 de Diciembre de 2.019 –cuya copia con el presente acompaño–, dictado por la **Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la IIª Nominación** –radicación de origen del presente proceso–, se concedió a esta parte **beneficio provisorio para litigar sin gastos**, otorgándose un plazo de treinta (30) días para acreditar los recaudos necesarios a los fines de la obtención del beneficio definitivo, permitiéndosele actuar en papel simple y libre de derechos (Art. 260 del C.P.C.C.T.).

Conforme lo expuesto, estando eximida esta parte de efectuar el depósito previsto por el Art. 752 del C.P.C.C.T., V.E. debe tener por cumplimentado el requisito de admisibilidad previsto en el Art. 754 –inc. 4– del C.P.C.C.T.

III – REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Agravia a esta parte la **Sentencia N° 353/19** toda vez que, incurriendo en el **vicio de reformatio in peius**, declara de abstracto pronunciamiento el planteo de inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T. introducido por esta parte al interponer recurso de queja por apelación denegada.

A) - REFORMATIO IN PEIUS

El principio "reformatio in peius" implica que la sentencia que resuelve un recurso no puede modificar la situación del recurrente colocándolo en una situación peor que la que estaba antes de deducir el mismo.

Así, por aplicación del principio de la prohibición de reformatio in peius, el Tribunal a quo no pudo modificar la sentencia en perjuicio del apelante, salvo que medie apelación también de la parte contraria, lo que en autos no ha sucedido.

Es pertinente señalar que ese Excmo. Tribunal ha sostenido, en numerosas ocasiones, que constituye un supuesto de violación del principio de congruencia la sentencia que incurre en reformatio in peius, toda vez que se expide sobre un tema que no fue materia de apelación por ninguna de las partes.

En el presente caso, resulta preciso destacar que la congruencia del decisorio que motiva el presente recurso se vio afectada por violentar el alcance de la jurisdicción que le había sido otorgada, al Tribunal a quo, en virtud del proveído por el cual el juez de primera instancia resolvió rechazar el recurso de apelación que, interpuesto por el actor, motivara la queja que tramita por la presente incidencia.

CHRISTIAN ANIBAL FERNÁNDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

Como el elevado criterio de V.E. podrá, el juez de primera instancia, mediante proveído de fecha 26 de Julio de 2.019, resolvió rechazar, en virtud del **Art. 436 del C.P.C.C.T.**, el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 24 de Junio de 2.019 que, a su vez, resolviera no hacer lugar a los planteos de nulidad e inexistencia de acto jurídico interpuestos por esta parte.

En virtud de ello, el Tribunal a quo, en el pronunciamiento que motiva el presente recurso, se extralimitó en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, dictando un pronunciamiento que encontró fundamento en una norma distinta a la que sirviera de base al pronunciamiento que motivara la respectiva queja por apelación denegada.

Como se dijo, conforme surge el proveído de fecha 26 de Julio de 2.019, el juez de primera instancia resolvió rechazar, en virtud del **Art. 436 del C.P.C.C.T.**, el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 24 de Junio de 2.019 que, a su vez, resolviera no hacer lugar a los planteos de nulidad e inexistencia de acto jurídico interpuestos por esta parte.

Siguiendo tal razonamiento, esta parte interpuso recurso de queja por apelación denegada, fundamentando tal recurso en la inconstitucionalidad de la norma que sirviera de fundamento al rechazo del recurso de apelación.

Mediante **Sentencia N° 353/19**, el Tribunal a quo resolvió declarar cuestión abstracta el planteo de inconstitucionalidad que motivara la queja interpuesta por esta parte, todo ello con fundamento en que la norma aplicable al caso sería el Art. 419 del C.P.C.C.T. y no el Art. 436 del C.P.C.C.T.

Así las cosas, al Tribunal a quo sólo le estaba permitido expedirse respecto de lo que fuera materia de recurso, es decir, respecto de la inconstitucionalidad del **Art. 436 del C.P.C.C.T.** y, una vez efectuado el test de constitucionalidad -y convencionalidad-, resolver respecto de la procedencia de la queja sometida a su examen.

Esa Excma. Corte Suprema de Justicia, ha establecido las siguiente **DOCTRINA LEGAL**:

“No resulta ajustada a derecho la sentencia que, excediendo los límites impuestos por el principio “*tantum appellatum quantum devolutum*”, ha incurrido en la prohibición de reformatio in peius violando el principio de congruencia” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala Civil y Penal-, Sentencia N° 975, de fecha 05/07/2018)

“Debe dejarse sin efecto la sentencia que, excediendo los límites impuestos por el principio “*tantum appellatum quantum devolutum*”, ha incurrido en la prohibición de reformatio in peius y violado el principio de congruencia, al

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

agravar con su decisión, la situación del apelante sin que medie agravio sobre dicho punto” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala Laboral y Contencioso Administrativo-, Sentencia N° 1492, de fecha 28/09/2017)

Debe recalcar que es el proveído de fecha 26 de Julio de 2019 -que rechazara el recurso de apelación- el que estableció los límites de la competencia y jurisdicción del Tribunal a quo, estando impedido éste de sobrepasar tales límites, so pena de incurrir en reformatio in peius.

Al respecto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha precisado:

“Conforme al principio de progresividad, el juicio no puede retrotraerse a etapas ya superadas, por lo que su desconocimiento resulta violatorio al principio constitucional del debido proceso legal y por lo tanto la nulidad es declarable de oficio en cualquier estado del proceso (art.167 C.P.C.C.)” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 682 de fecha 03/11/1994)

“Si en el desarrollo gradual de las instancias procesales, hubo cuestiones que fueron resueltas y quedaron firmes o alcanzaron el estado de cosa juzgada, el principio de gradualidad procesal, custodiado por la preclusión y fincado en las reglas del debido proceso y del derecho de

propiedad, impide el replanteo de los temas superados de un modo definitivo, irrevocable e irreversible. De otro modo, a más de afectarse la certeza procesal y judicial que alcanzaron esos temas, se abriría la posibilidad de la reformatio in pejus, esto es, que el recurso de uno de los interesados se vuelva en su contra, colocándolo en peor situación que la que impugna, con desmedro de sus derechos de defensa y de propiedad, ambos de raíz constitucional" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, in re "NOUGUÉS HNOS. SACIFI vs. SUC. DE CARLOS ELWART Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO", Sentencia N° 425 del 10/06/97)

En consecuencia, el pronunciamiento que motiva el presente recurso dejarse sin efecto, ordenándose el reenvío de los presentes obrados a los efectos que el Tribunal a quo, por la Sala que resulte desinsaculada, dicte nuevo pronunciamiento.

B) - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Agravia esta parte la Sentencia N° 353/19 por cuanto omite efectuar el control de constitucionalidad impuesto por el Art. 88 del C.P.C.T.

Como el elevado criterio de V.E. podrá justipreciar, el Art. 88 del C.P.C.T. establece:

"Art. 88.- Declaración judicial de inconstitucionalidad de oficio. El control de constitucionalidad

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4783 - L° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

debe ejercerse por la Justicia, aún sin petición de parte interesada, en aquellas causas llamadas a su conocimiento.

Los Magistrados deben abstenerse de aplicar la ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas por la Constitución Nacional y Provincial... (Lo subrayado me pertenece)

En virtud de la norma antes transcripta, en nuestro sistema procesal el **control de constitucionalidad resulta obligatorio** para todos los magistrados en los procesos que son llevados a su conocimiento, más aún cuando media un planteo de inconstitucionalidad de parte, conforme acontece en autos.

Ese Excmo. Tribunal, tuvo oportunidad de sentar la siguiente **DOCTRINA LEGAL**:

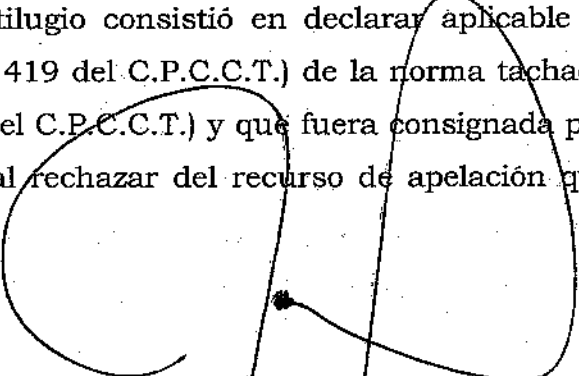
"Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite hacerse cargo de una cuestión constitucional necesaria para la recta composición de la litis con sustento en que la actora no petitionó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa aplicable" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala Laboral y Contencioso Administrativo-, Sentencia N° 1852, EXPTE. N° L905/12, de fecha 08/10/2019)

A contrario sensu, si en el caso medió expresa petición de declaración de inconstitucionalidad, resulta obligatorio para el juzgador efectuar el test de constitucionalidad impuesto por el Art. 88 del C.P.C.C.T.

A su respecto, nótese que en el presente caso, a pesar de haberse sustanciado el referido planteo de inconstitucionalidad, el Tribuna a quo se desentendió de resolver el mismo bajo la astucia de declarar aplicable una norma distinta a la norma tachada de inconstitucional por esta parte y que fuera el fundamento del rechazo de recurso de apelación de parte del juez de primera instancia, rechazo que motivara la queja resuelta por la **Sentencia N° 353/19**.

En otro orden de ideas, debe destacarse que no resulta válido el artilugio que fuera fundamento de la declaración de abstracto pronunciamiento que efectúa la Sentencia N° 353/19 respecto del planteo de inconstitucionalidad esgrimido por esta parte al interponer recurso de queja por apelación denegada.

Tal artilugio consistió en declarar aplicable al caso una norma distinta (Art. 419 del C.P.C.C.T.) de la norma tachada de inconstitucional (Art. 436 del C.P.C.C.T.) y que fuera consignada por el juez de primera instancia al rechazar del recurso de apelación que motivara la respectiva queja.



CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - 1° D. - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - 1° K. - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL N° 97 - F° 614

Al respecto, como el elevado criterio de V.E. podrá justipreciar, de los fundamentos otorgados por esta parte para predicar la inconstitucionalidad del Art. 436 del C.P.C.C.T. resulta claro que los mismos estaban dirigidos a controvertir la regla de la inapelabilidad prevista, tanto en el Art. 419 del CP.C.C.T. como en el Art. 436 del C.P.C.C.T.

Sin perjuicio del obligatorio test de constitucionalidad omitido, lo cierto es que, habiéndose reprochado la constitucionalidad del régimen mismo de la inapelabilidad prevista en los procesos de desalojo por la norma formal, el Tribunal a quo debió expedirse respecto de la inconstitucionalidad endilgada, so pena de incurrir en violación del Art. 31 del C.P.C.C.T.

En consecuencia, habiéndose omitido efectuar el obligatorio control de constitucionalidad y habiendo existido expreso planteo a su respecto, el pronunciamiento que motiva el presente recurso dejarse sin efecto, ordenándose el reenvío de los presentes obrados a los efectos que el Tribunal a quo, por la Sala que resulte desinsaculada, dicte nuevo pronunciamiento.

C) - ARBITRARIEDAD NORMATIVA

La sentencia recurrida reviste la condición de arbitraria, comportándose como un pronunciamiento inadecuadamente fundado, toda vez que ha omitido efectuar el test de constitucionalidad respecto del régimen de inapelabilidad previsto en los procesos desalojo,

habiendo esta parte cuestionado tal régimen al ser contrario del derecho a la doble tutela previsto constitucionalmente en el Art. 18 de la Constitución Nacional y en los Arts. 8 -inc. 1 y 2 (h)- y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -de jerarquía constitucional (Art. 75 -inc. 22- de la Constitución Nacional).

Al respecto dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Si el a quo ha omitido considerar una defensa oportunamente introducida al proceso, conducente para la solución adecuada del pleito y que de conformidad al trámite procesal de éste debía razonablemente ser tratada, tal omisión hace pasible al pronunciamiento de la tacha de arbitrariedad alegada en los términos de conocida jurisprudencia del tribunal" (CS, 11/9/84, ED, t. 111, p. 511).

"Si los extremos omitidos por el tribunal son susceptibles de gravitar en la decisión del litigio, el pronunciamiento cuestionado no satisface el requisito de validez de las sentencias judiciales de ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la litis" (CS, 3/11/83, ED, t. 107, p. 187; Fallos, t. 303, p. 1766)

"Es condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan, en consecuencia,

derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CS, 30/04/96, LL, t. 1996-D, p. 274). En igual sentido, causa CSJN, 19/12/95, LL, t. 1996-C, p. 489)

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en igual sentido, ha expresado:

“La sentencia impugnada omitió pronunciarse sobre cuestiones conducentes para la solución de recurso de apelación deducido por la demandada, inequívocamente expuestas en el escrito de expresión de agravios. De ese modo, incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 inc. 5° del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPL, comprometiendo además el principio de congruencia, de raigambre constitucional (arts. 18 de la CN y 30 de la CP). Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala Laboral y Contencioso Administrativo-, in re “MATARRESE, OLGA BEATRIZ vs. GEORGE, MÓNICA VIRGINIA S/COBRO DE PESOS”, Sentencia N° 1578, de fecha 17/10/2017)

En consecuencia, debe tenerse a la sentencia recurrida como un pronunciamiento inadecuadamente fundado,

descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que solicito así se declare.

D) - ARBITRARIEDAD FÁCTICA

El acto jurisdiccional que por el presente se ataca contiene el vicio de arbitrariedad fáctica toda vez que, fundándose en afirmaciones meramente dogmáticas, ha omitido analizar y ponderar las verdaderas constancias del presente juicio, incumpliendo, de tal modo, el requisito de validez de los pronunciamientos judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado:

“Si la interpretación del a quo se limita a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto, se impone descalificar el pronunciamiento en este aspecto” (CSJN, Fallos, t. 303; p. 2080).

“Es requisito de validez de las sentencias judiciales que ellas sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa. El fallo que aparece dictado sobre la base de la voluntad de los jueces que lo suscriben, no puede ser considerado una verdadera sentencia judicial...” (CSJN, Fallos 296:456).

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. Nº 629 - Lº 01 - Fº 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. Nº 4703 - Lº K - Fº 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL Tº 97 - Fº 614

Respecto del Art. 419 del C.P.C.C.T. en el pronunciamiento en crisis puede leerse:

“...Se trata de una cuestión de política legislativa que se apoya en el principio de economía procesal y ha sido ideado en función de la celeridad que el legislador pretende imprimirle al juicio de desalojo.” (Lo subrayado me pertenece)

Atento a las constancias de autos, en especial, a los serios reparos constitucionales vertidos por esta parte en el respectivo libelo de interposición de la queja que tramita por el presente, el fundamento de política legislativa no resulta adecuado para sostener la aplicación de la regla de la inapelabilidad prevista en relación a los procesos de desalojo por la norma formal.

Conforme nuestro sistema constitucional actual, todas las normas de rango inferior deben ajustarse al texto constitucional y a las normas convencionales de rango constitucional introducidas en el Art. 75 -inc. 22- de la Constitución Nacional.

Así las cosas, cuestiones de política legislativa no pueden ser fundamento de la violación de derechos y garantías constitucionales, no siendo el caso del juzgamiento de oportunidad, mérito o conveniencia, sino el examen del régimen de la inapelabilidad establecido en los procesos de desalojo a los efectos de verificar si el

mismo se adecúa al texto constitucional y a las normas convencionales de rango constitucional.

Es decir, no estamos en el caso en la hipótesis de un control de política legislativa, sino que, a través del planteo de inconstitucionalidad efectuado por esta parte, se exige el examen respectivo a los efectos de verificar si la norma impugnada se compadece con el sistema constitucional de derechos y garantías previsto en la norma constitucional y con el actual estándar derechos y garantías que, introducidos a nuestro sistema constitucional por la adopción de normas internacionales, poseen raigambre constitucional.

En consecuencia, fundándose el pronunciamiento en crisis en afirmaciones meramente dogmáticas y habiendo omitido analizar y ponderar las verdaderas constancias del presente juicio, el mismo debe descalificarse como acto jurisdiccional válido.

E) - DOCTRINA LEGAL

La **Sentencia N° 353/19** incurre en el vicio de reformatio in peius, omite efectuar el obligatorio control de constitucionalidad y adolece el vicio en arbitrariedad normativa y fáctica, por lo que la misma debe dejarse sin efecto ordenándose el **REENVÍO** de las presentes actuaciones al Tribunal a quo a los efectos que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento a tenor de la **DOCTRINA LEGAL** siguiente:

CHRISTIAN ANIBAL FERNÁNDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - 1° 01 - P° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - 1° K - P° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - P° 614

“Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que, habiendo mediado expreso planteo de inconstitucionalidad al interponer la respectiva queja respecto de la norma que fuera el fundamento del rechazo de un recurso de apelación, mediante la aplicación de una norma distinta y so pretexto de política legislativa, omite efectuar el control de constitucionalidad exigido por el referido planteo y por el Art. 88 del C.P.C.T.”

IV - MANTENGO RESERVA DE CASO FEDERAL

Por el presente **MANTENGO RESERVA DE CASO FEDERAL** efectuada en **Acápite III** del libelo de fecha 23 de Octubre de 2.018, en **Acápite III** del libelo de fecha 12 de Noviembre de 2.018 y en **Acápite III** del libelo de fecha 23 de Septiembre de 2.019, a los efectos de ocurrir por ante la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía del Recurso Extraordinario Federal, a consecuencia de encontrarse en juego derechos y garantías constitucionalmente reconocidos, como ser el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal (Art. 18 de la C.N.) y el derecho a ser oído en tiempo útil y razonable (Arts. 8 -inc. 1 y 2 (h)- y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

V - DERECHO

Fundo el presente recurso en los Arts. 31, 436, 748 y ss. y cc. del C.P.C.C.T., en el Art. 18 y 75 -inc. 22- de la Constitución Nacional, en los Arts. 8 -inc. 1 y 2 (h)- y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la doctrina y jurisprudencia imperante en la materia y que fuera citada a lo largo del presente.

VI - PRUEBA

Ofrezco la siguiente prueba que hace a mi derecho:

A) - DOCUMENTAL

1.- Constancias de autos.

2.- Proveído de fecha 10 de Diciembre de 2019, dictado por la **Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la IIª Nominación** -radicación de origen del presente proceso-, por el cual se concedió a esta parte **beneficio provisorio para litigar sin gastos.**

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. Nº 629 - Lº 01 - Fº 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. Nº 4703 - Lº K - Fº 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL Tº 97 - Fº 614

VII - PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.E. solicito:

1.- Por **INTERPUESTO**, en tiempo y legal forma, **RECURSO DE CASACIÓN** (Art. 748 y cc. y ss. del C.P.C.C.T.) en contra de la **Sentencia N° 353/19** (fs. 150), dictada en fecha 03 de Diciembre de 2019.

2.- Por **MANTENIDA RESERVA DE CASO FEDERAL**, conforme acápite IV.

3.- Por ofrecida prueba, conforme acápite VI.

4.- Al resolver, previo los trámites de ley, declare admisible el recurso de casación que por el presente se interpone y eleve las presentes actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia a los efectos de la resolución del referido recurso, todo ello en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos a lo largo del presente, con expresa imposición de costas en caso de oposición.

Dígnese V.E. proveer de conformidad y

SERÁ JUSTICIA

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - 1° OI - F° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - 1° K - F° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - F° 614

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Juzgado Civil en Documentos y Locaciones II

ACTUACIONES N°: 9062/17



H104024019229

EXPTE.: 9062/17 - JUICIO: GRAMAJO INES JOSEFINA c/ FERNANDEZ CHRISTIAN
ANIBAL s/ DESALOJO

San Miguel de Tucumán, 10 de diciembre de 2019.- I.- Agréguese. II.- Concédase al presentante el beneficio provisorio para litigar sin gastos y un plazo de treinta días para acreditar los recaudos necesarios a los fines del beneficio definitivo (Art. 6° de la ley 6.314), bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 260/261, concordante con el art. 62 del C.P.C.- Librese oficios (debiéndose denunciar nombre y condiciones personales de/o la cónyuge). Permítase actuar en el papel simple y libre de derechos (Art. 260 del C.P.C.).- PERSONAL.- FDO: DRA. MARIA

VICTORIA GOMEZ TACCONI - JUEZ - SSC 9062/17

DRA. MARIA VICTORIA GOMEZ TACCONI
JUEZ
JUZGADO CIVIL EN DOC. Y LOC. 2° NOM

CHRISTIAN ANIBAL FERNANDEZ
ABOGADO
MAT. PROF. N° 629 - L° 01 - P° 17 (C.A.S.)
MAT. PROF. N° 4703 - L° K - P° 194 (C.A.T.)
MAT. FEDERAL T° 97 - P° 614